I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 1175/1960, de 15 de junio, por el que se dispone la nueva estructuración del Servicio Minero y Geológico de las Provincias Africanas.

Por Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de quince de julio de mil novecientos cincuenta y ocho se dispuso una reorganización del Servicio Geológico y Minero de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, asignándosele como funciones a dicho Servicio las relacionadas con las actividades técnico-mineras en general y en especial las derivadas de la aplicación en los expresados territorios de la legislación minera y de hidrocarburos, mostrándose con ello la preocupación que tales cuestiones han despertado siempre en la Administración de dichas Provincias Africanas.

Actualmente, como consecuencia de los trabajos mineros en ejecución y de las misiones que encomienda la legislación vigente en minería e hidrocarburos al referido Servicio, se hace necesario introducir algunas reformas en su estructuración, dotándole de los medios precisos para el mejor desarrollo de las funciones que le están encomendadas.

Merece una atención especial el preceptivo asesoramiento técnico que señala el artículo sesenta y cinco de la Ley para el Régimen Jurídico de la Investigación y Explotación de los Hidrocarburos, lo que aconseja que el Servicio de Hidrocarburos de la Dirección General de Minas y Combustibles designe un Delegado entre los Ingenieros que forman parte del Servicio Minero y Geológico de las Provincias Africanas.

Asimismo, y con el objeto de que el Instituto Geológico y Minero de España pueda desempeñar mejor su misión, relacionada con la formación del mapa geológico de las Provincias Africanas, se establece también, para mantener un enlace perfecto, que dicho Instituto designe un Delegado en el Servicio Minero y Geológico de dichas provincias, el cual, a su vez, designará un Delegado en la Junta de Vocales del Instituto Geológico y Minero.

Por no ser fácilmente previsibles las necesidades de personal, se determina el máximo del que puede precisarse para un período suficientemente amplio, sin perjuicio de que este personal vaya siendo designado, paulatinamente, a medida que se haga necesaria su incorporación.

Por último, se ha considerado también que el Consejo de Minería del Ministerio de Industria, como alto Organismo consultivo e Inspector de los Cuerpos Nacionales de Minas, sea el centro consultivo que, a petición de la Presidencia del Gobierno, preste una conveniente unidad de criterio en los asuntos de su competencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de junio de mil novecientos sesenta,

DISPONGO:

Artículo primero. *Jurisdicción.*—El ámbito de las actividades del Servicio Minero y Geológico de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas será el comprendido en el territorio de dichas Provincias: Ifni, Sahara Español, Río Muni y Fernando Poo.

Artículo segundo. *Competencia.*—Corresponden al Servicio Minero y Geológico de las Provincias Africanas todos los cometidos específicos de los Cuerpos Nacionales de Minas al Servicio del Estado Español, con las excepciones previstas en la legislación vigente, y dentro de ellos deberá prestar especial atención a las siguientes actuaciones:

- Demarcación, deslindes y amojonamientos de los permisos de investigación o concesiones de explotación que se otorguen.
- Inspección de la seguridad en los trabajos.
- Inspección del cumplimiento de planes de trabajo.
- Colección, clasificación y estudio de todos los datos de interés geológico y minero que se obtengan en los trabajos de investigación, explotación, beneficio y transporte de sustancias minerales, informando a la Superioridad de la revalorización que representen tales datos e investigaciones, a los efectos que previene la legislación vigente.

e) Ejecución de las investigaciones geológicas y mineras que ordene o apruebe la Superioridad, con el preceptivo asesoramiento y la colaboración, cuando proceda, del Instituto Geológico y Minero de España.

f) Confección del plano minero de las Provincias Africanas.

g) Formación del catastro de minas.

h) Prestación de servicios a entidades que los soliciten oficialmente.

Artículo tercero. *Organización.*—El Servicio Minero y Geológico de las Provincias Africanas, integrado en la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, actuará bajo la dependencia inmediata del Director general de la misma.

Constará de una Jefatura de Servicios con dos Secciones y dos Delegaciones Provinciales.

La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas designará entre los Ingenieros que integran el Servicio Minero y Geológico al que se refiere el presente Decreto, y a propuesta de la Dirección General de Minas y Combustibles, un Delegado del Instituto Geológico y Minero de España y otro del Servicio de Hidrocarburos en esta última Dirección General.

La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, a su vez, estará representada en el Instituto Geológico y Minero de España por el Ingeniero Vocal de este Centro que designe la Dirección General de Minas y Combustibles, a propuesta de la Dirección General primera citada.

A requerimiento de la Presidencia del Gobierno, el Consejo de Minería emitirá informes en los asuntos de su competencia, realizando, también a requerimiento de dicho Departamento, las inspecciones que se consideren necesarias.

Artículo cuarto. *Personal.*—A medida que las circunstancias lo exijan, y previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, serán adscritos al referido Servicio: un Ingeniero, Jefe del Servicio; dos Ingenieros, Encargados de Sección; dos Ingenieros, Delegados provinciales; dieciséis Ingenieros, dieciocho Ayudantes o Peritos de Minas, siete Delineantes Calculistas y catorce Auxiliares administrativos. Las Delegaciones dispondrán de los mecánicos conductores y radiotelegrafistas que sean necesarios para la realización de expediciones. Los Ingenieros y Ayudantes pertenecerán a los Cuerpos Nacionales de Minas y serán nombrados por el Ministerio de Industria, previo concurso de méritos, convocado y resuelto por la Presidencia del Gobierno. El personal restante será nombrado por este mismo Departamento ministerial. Se fija la edad límite de cuarenta y cinco años para concurrir a las plazas pertenecientes a las Delegaciones.

El personal ya designado para el Servicio Minero y Geológico de las Provincias Africanas se confirma en los cargos que ocupa actualmente y tendrá los mismos derechos que el ingresado por concurso de méritos.

Artículo quinto.—Los funcionarios adscritos a este Servicio Minero y Geológico percibirán los sueldos que les correspondan con cargo a los presupuestos de sus plantillas de procedencia, las cuales no sufren aumento por este concepto. Para el restante personal se habilitarán por la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas las cantidades correspondientes en concepto de compensación de sueldo.

Las gratificaciones serán también fijadas y abonadas por dicha Dirección General. Para el personal con residencia en las Provincias Africanas se estará a lo dispuesto en lo que se refiere a la denominada Asignación por Residencia y Permisos Territoriales.

Las dietas y remuneraciones por servicios serán las vigentes, y en los casos no previstos se devengará doble remuneración de la señalada para servicios en la Península. La distribución de estas percepciones se efectuará tomando como base los porcentajes establecidos en la correspondiente Orden ministerial de dos de marzo de mil novecientos cincuenta y seis dictada por el Ministerio de Industria.

Para la organización de este Servicio Minero y Geológico y adquisición de los medios materiales necesarios se habilitarán los créditos correspondientes en los Presupuestos de las Provincias Africanas, con cargo a los ingresos procedentes de los distintos conceptos relacionados con las concesiones de hidrocarburos referentes a las mismas.

Artículo sexto.—El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno queda facultado para dictar las disposiciones ne-

cesarias para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto.

Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos sesenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno.

LUIS CARRERO BLANCO

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

NOTIFICACION del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte haciendo extensivo a Hong Kong y a las Islas Falkland el Convenio Aduanero relativo a la importación temporal para uso privado de Embarcaciones de Recreo y Aeronaves, firmado en Ginebra el 18 de mayo de 1956.

El Asesor jurídico de las Naciones Unidas comunica a este Ministerio que, con fecha 12 de mayo de 1960, el representante permanente del Reino Unido en las Naciones Unidas ha notificado la extensión del Convenio Aduanero relativo a la importación temporal para uso privado de Embarcaciones de Recreo y Aeronaves a Hong Kong y a las islas Falkland.

De acuerdo con el artículo 37, el Convenio entrará en vigor, para Hong Kong y las islas Falkland el 10 de agosto de 1960.

Lo que se hace público para conocimiento general y en continuación a lo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo de 1960.

El Subsecretario, Pedro Cortina.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 1176/1960, de 15 de junio, por el que se aclara el párrafo primero del artículo ciento veintiocho de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956.

Prescribe el párrafo primero del artículo ciento veintiocho de la Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis la forma en que han de constituirse las Salas de lo contencioso-administrativo de las Audiencias Territoriales cuando tengan que resolver un incidente de nulidad surgido en autos de que conozcan en única instancia. La composición de aquéllas se completará entonces con el Presidente de la Audiencia y el Magistrado más antiguo de la Sala de lo Civil, atendiendo a la conveniencia, por razones de orden público, de que no sea el mismo Tribunal el que deniegue, primero, la subsanación del defecto procesal y el que enjuicie, después, idéntico problema en el incidente que se inicie a continuación. Confirma este criterio el párrafo segundo del propio precepto, al concretar el distinto modo de integrarse las Salas del Tribunal Supremo en la hipótesis de que se promueva un incidente a consecuencia de no haberse accedido a la nulidad de actuaciones.

Como los Tribunales provinciales contencioso-administrativos, regulados en la legislación anterior, siguen conociendo de los recursos que se interpongan mientras no se creen las correspondientes Salas de las Audiencias Territoriales, según se deduce de la disposición transitoria primera de la Ley, se ha suscitado la duda, ante la realidad de un caso, sobre si la constitución de dichos Tribunales provinciales, en el supuesto aludido, ha de ampliarse en los términos que señala el citado artículo ciento veintiocho. La solución debe ser afirmativa, no sólo porque, de acuerdo con el párrafo dos de la disposición transitoria tercera, los recursos contencioso-administrativos tienen que ajustarse en todos sus aspectos, sin salvedad ninguna, a las prescripciones de la Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis y, por tanto, al expresado artículo, sino también porque lo contrario implicaría atribuir a los Tribunales provinciales unas prerrogativas, desprovistas de justificación, que pugnarían con el designio del precepto. Y de aquí la necesidad, para evitar perplejidades, de la aclaración pertinente, que coincide con el parecer sustentado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de junio del corriente año,

DISPONGO:

Artículo único.—Los Tribunales provinciales contencioso-administrativos se completarán con el Presidente de la Audiencia Territorial respectiva y el Magistrado más antiguo de la Sala de lo Civil, en el supuesto del párrafo primero del artículo ciento veintiocho de la Ley de veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos sesenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DECRETO 1177/1960, de 15 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la actuación de los Tribunales de Honor en el Cuerpo de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas.

Establecida por la Ley de diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta y uno la vigencia de los Tribunales de Honor, como medio eficaz para mantener el prestigio de los Cuerpos y Organismos del Estado, enjuiciando aquellas conductas de sus funcionarios que ocasionalmente pudieran, atentando a la integridad del honor colectivo de aquéllos, poner en entredicho su prestigio, quedaron sancionadas unas bases de procedimiento que habrían de ser desarrolladas para aplicarlas en cada Cuerpo, Ministerio u Organismo de la Administración.

Aprobado por Decreto de catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y dos el Reglamento para la actuación de tales Tribunales en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, principal de los facultativos del Ministerio de Obras Públicas, es conveniente regular asimismo, con las debidas garantías de procedimiento, la actuación de los Tribunales de Honor en el Cuerpo de Administración Civil de dicho Departamento, quedando de esta manera preservada la limpia ejecutoria y la ética profesional de los funcionarios del Ministerio en los dos campos fundamentales—técnico y administrativo—de su actuación.

En su virtud, de conformidad con el Consejo de Estado, en Comisión Permanente, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de junio de mil novecientos sesenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el adjunto Reglamento para la actuación de los Tribunales de Honor en el Cuerpo de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo segundo.—El Ministro de Obras Públicas queda autorizado para dictar las disposiciones complementarias o aclaratorias que pueda hacer precisas o convenientes la aplicación del Reglamento, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de junio de mil novecientos sesenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODIAZ

Reglamento para la actuación de los Tribunales de Honor en el Cuerpo de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas

Artículo 1.º Materia justiciable.—De conformidad con la Ley de 17 de octubre de 1941, se regula el procedimiento de Tribunales de Honor para conocer y sancionar los actos deshonorables cometidos a partir de la vigencia de este Reglamento por funcionarios del Cuerpo de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas, que les hagan desmerecer en el con-